

D. VALENZUELA y A. UGARTE

El uso y abuso de herramientas legales por parte de movimientos y grupos de interés que tienen como consecuencia la paralización de proyectos de inversión está siendo una de las grandes trabas para retomar el crecimiento de Chile. Así lo declararon exautoridades, dirigentes gremiales, representantes de la industria y analistas en la última edición de Crónica para el Futuro de "El Mercurio", El Mercurio de Valparaíso y Emol, publicada el viernes.

Ejemplos de lo anterior serían el masivo ingreso de observaciones en los procesos de participación ciudadana del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que tendrían por objetivo dilatar la tramitación de permisos y las acciones judiciales para frenar la realización de proyectos, en muchos casos presentadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ambientalistas.

Consultados por "El Mercurio", candidatos presidenciales entregaron sus propuestas respecto de cómo abordar este fenómeno.

Transparencia como prerrequisito

La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirma que "respecto de las ONG y otras organizaciones similares, nuestra propuesta contempla que ellas deberán transparentar su objeto legal, sus estados financieros y las fuentes de financiamiento como prerrequisito de participación en el SEIA".

Matthei ha afirmado que una de sus prioridades será desbaratar la inversión y acelerar el crecimiento y, para ello, asevera, "simplificaremos los permisos y destrabaremos proyectos que mejorarán la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, crearemos una ventanilla *fast-track* para revitalizar proyectos de inversión superiores a US\$ 5 millones y priorizaremos 30 proyectos de infraestructura dándole un trato preferente y equipos especializados para su ejecución".

Registro de miembros y fuentes de financiamiento

La candidata del PPD, PS, PL y PR, Carolina Tohá, por su parte, sostiene que "más que restringir la participación de la sociedad civil, lo que Chile necesita es ordenarla y fortalecerla".

Para ello propone "instituir legalmente la participación temprana en los grandes proyectos de inversión. Esta etapa debe ser

Debate por rol de estas agrupaciones en la tramitación de permisos para proyectos de inversión: Matthei y Tohá son partidarias de aumentar exigencias para las ONG que participan en el sistema de evaluación ambiental

Kaiser, por su parte, postula que estas "no debiesen tener legitimación activa para interponer acciones legales ahí donde no son sus miembros los directamente afectados", y Winter afirma que "el país requiere una mejor regulación a las organizaciones de la sociedad civil".



FUERTE INFLUENCIA.— Además de manifestarse, movimientos sociales y agrupaciones ambientalistas se hacen parte de los procesos de participación ciudadana y de otras instancias en la tramitación de permisos para proyectos de inversión, ya sea a título propio o en representación de comunidades.

Crónica PARA EL Futuro

obligatoria (...) y orientarse a construir acuerdos sobre intereses comunes", que "deberían ser formalizados como compromisos voluntarios dentro del proceso de evaluación ambiental. Quienes sean invitados formalmente a participar y decidan no

hacerlo, no deberían tener derecho a realizar reclamaciones posteriores".

También cree que se debe "fortalecer la capacidad del Estado para facilitar estos procesos apoyándose en consultores independientes certificados, pero con supervisión pública", y que "es razonable exigir que las organizaciones que quieran participar y estén fuera del área de influencia directa del proyecto sean forma-

les, con registro de miembros y fuentes de financiamiento transparentes".

"Parar industria de las querellas"

Más duro es el postulante a La Moneda del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien afirma que las ONG "no debiesen tener legitimación activa para interponer acciones legales ahí donde no

son sus miembros los directamente afectados. Queremos parar esta industria de las querellas de las cuales viven esas organizaciones".

Por ello, dice que apoya el proyecto de ley que busca obligar a las ONG transparentar sus ingresos y mecanismos de financiamiento. La moción fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero desde 2023 está a la espera de tramitación en la comisión de Gobierno del Senado.

Conocer uso y fuente de los recursos públicos

Una mirada distinta tiene el representante del Frente Amplio en la carrera presidencial, Gonzalo Winter, quien cree que "la sociedad civil no es responsable de las demoras en los trámites de proyectos de inversión. Más bien, es el Estado el que tiene el deber de reducir significativamente el tiempo promedio de tramitación de permisos para mipymes y grandes proyectos".

En ese sentido, apunta a que es necesario aprobar el proyecto de ley de permisos sectoriales y "avanzar hacia un sistema inteligente de permisos que no sacrifique estándares de protección ambiental y sanitaria".

Igualmente, postula que "el país requiere una mejor regulación a las organizaciones de la sociedad civil. En mi gobierno promoveremos la inteligencia de datos para evitar la duplicidad de registros, facilitar el trabajo de las organizaciones y exigir más transparencia en el uso y fuente de los recursos públicos".

Discusión "urgente"

El impulsor del proyecto para transparentar el financiamiento de las ONG, diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), afirma que es "urgente poner en tabla de la comisión de Gobierno (del Senado)" la moción que fue aprobada en primer trámite, pero que desde 2023 no ha seguido discutiéndose.

Añade: "Yo espero que las autoridades del Senado entiendan que hoy día amparar el secretismo respecto al financiamiento de las ONG es ser parte también de las eventuales irregularidades que ellos mismos están cometiendo".

Al cierre de esta edición, no hubo respuesta de los candidatos del PC, Jeannette Jara, y del P. Republicano, José Antonio Kast.

Candidata de Chile Vamos se inclina por modificar la Ley Lafkenche y postulante de los libertarios, por derogarla

Otro punto sobre el cual varios especialistas coinciden es que se debe buscar soluciones respecto del impacto de la Ley Lafkenche y las solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) instituidos por esta norma. Es algo que también está generando controversia, pues cuando una comunidad o grupo de comunidades indígenas solicita un ECMPO, esto impide que se tramite cualquier otra petición de concesión antes de tener la resolución, lo cual puede tomar años.

Sobre la normativa, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, asegura que "modificaremos la ley para evitar que las externa-

lidades negativas de las solicitudes de ECMPO sigan frenando el desarrollo de la acuicultura, la pesca y los empleos que estas actividades generan". En ese sentido, opina que "se le podría dar urgencia" al proyecto de ley que actualmente está en el Senado y que busca modificar el cuerpo legal.

En tanto, Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, responde que "nosotros hemos propuesto la derogación de la Ley Lafkenche, la derogación de la Ley Indígena y la denuncia del tratado del Convenio 169 de la OIT. Así de frontal. No queremos corregir nada, creemos que está todo mal".

En el Congreso hay cuatro proyectos para modificar la Ley Lafkenche. El senador Fidel Espinoza (PS), autor de una de las mociones, acusa que el "Gobierno no quiere darle urgencia. El Presidente está empeñado en señalar que no va a sufrir modificaciones, pero se olvida que este es un tema del Legislativo, y nosotros queremos mejorar la ley, que a todas luces tiene problemas, tiene dificultades".

También el senador Carlos Kuschel (RN), suscribió la moción y cree que se le debe dar urgencia: "Nosotros tenemos la actividad salmonera estancada, no estamos creciendo", asegura.